



Grave incidente en Argentina

La cancelación del partido por la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, como resultado de graves y bochornosos incidentes, vuelve a fijar la mirada en el deplorable fenómeno de las barras bravas.

En esta ocasión, un grupo de hinchas de Universidad de Chile comenzó a lanzar objetos contundentes a los de Independiente, ubicados en la plataforma inferior, junto con activar bombas de ruido, quemar asientos y destruir baños; posteriormente, luego de suspendido el partido y cuando los chilenos se iban retirando, un grupo de partidarios del club argentino atacó inmisericordemente, con palos y otros objetos, a los que quedaban, con el resultado de una veintena de heridos, algunos muy graves, además de un centenar de detenidos.

El incidente hizo reaccionar a ambos gobiernos. El Presidente Boric envió a su ministro del Interior a verificar la condición de los chilenos, y en el caso argentino, el asunto alcanzó ribetes políticos, cuando la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “inútil” al gobernador peronista Kicillof, titular de la provincia de Buenos Aires, por la inoperancia mostrada por las fuerzas policiales bajo su dependencia.

Pero más allá de las responsabilidades que se les puedan endosar a los organizadores o incluso a la policía, lo que resulta absolutamente inaceptable es el comporta-

miento de las barras bravas. Ese es el origen del problema. Los chilenos que habrían iniciado los ataques y los argentinos que se ensañaron criminalmente contra un grupo de visitantes ya inermes no deberían tener acceso a los estadios. La violencia desatada con que actúan es inadmisible y los transforma de suyo en indignos representantes de los clubes a los que dicen respaldar.

Este problema ha sido exitosamente abordado en otras latitudes. Ello ha requerido contar con la voluntad política de las autoridades, pero también con la de los dirigentes de los clubes, cada uno en su ámbito, para tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, cooperar en la utilización de marcadores biométricos de los sujetos indeseables, e incorporar a

las bases de datos a quienes se ganen ese calificativo, de modo de impedir que ingresen o se acerquen a los recintos deportivos; instalar cámaras de vigilancia en ellos y sus entornos, además de sistemas de torniquetes de acceso, todo ello acompañado de guardias y policías empoderados, que aseguren que las normas se respeten.

En Chile, lamentablemente, ni la dirigencia ni las autoridades han tenido, hasta ahora, la necesaria convicción y estrictez para aplicar esas medidas, y así confrontar el problema con la decisión que amerita. La justificada indignación de nuestras autoridades frente a lo ocurrido en Argentina no excusa su propio fracaso en enfrentar la violencia y la criminalidad de las barras bravas.

La justificada indignación de nuestras autoridades no excusa su propio fracaso frente a la violencia de las barras bravas.